



Museo

de Arqueología y Antropología



Universidad Nacional Mayor de
San Marcos
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
CENTRO CULTURAL

Año 1, N° 12

Diciembre 1998

La Gestión del Patrimonio Arqueológico

...y si saben que los dichos visitantes... quitaron que no u viese bayfes, cantares, o taquies antiguos en lengua maternal o general de los indios y... ynstrumentos que para ello tenían como eran tamboriles, caveças de venados, cantaros y plumerías.*

Los bienes arqueológicos, sitios u objetos, que hemos heredado de las sociedades que nos antecedieron, constituyen parte importante del patrimonio arqueológico nacional; y tenemos, por ello, la responsabilidad de transmitirlos, del modo más íntegro posible, a las nuevas generaciones de peruanos. El estado, representante jurídico de la nación, es el primero al que compete la custodia, conservación y defensa de esta herencia cultural pero también los diversos componentes de la sociedad civil deben velar para que cada gobierno, que asume las funciones del estado, cumpla con este deber nacional.

A lo largo del presente siglo un conjunto de normas legales ha contemplado el trato que debía darse a los bienes arqueológicos para garantizar su conservación. No obstante, éstos han ido desapareciendo por la intromisión de intereses ajenos al bienestar social y en la medida que crecían las ciudades sin ninguna planificación.

Bajo estas condiciones, a partir de la década del sesenta los sitios arqueológicos de Lima fueron presa fácil de quienes buscaban tierras sin dueño. La necesidad social de los migrantes fue aprovechada muchas veces por inescrupulosos traficantes de tierras, que establecieron un lucrativo negocio en base a los sitios arqueológicos. Como resultado de esta acción, incontrolada por el estado, los dispositivos legales se convirtieron en letra muerta. Los testimonios culturales de la ocupación prehispánica de los tres valles de la ciudad capital: Rimac, El Chillón y Lurín fueron progresivamente destruidos. Entre el 60 y 80% de los establecimientos, observados en las fotos aéreas de

1944, han desaparecido. El resto se encuentra mermado, invadido y bajo la inminente amenaza de destrucción, esta vez con autorización oficial y con la participación de arqueólogos, atraídos por los jugosos pagos de los llamados «trabajos de evaluación o liberación».

Cuando Julio C. Tello o Jorge C. Muelle propusieron medidas y organizaron instituciones con la finalidad de velar y proteger el patrimonio arqueológico, tales como el Museo Nacional de Arqueología y Antropología, la Casa de la Cultura -hoy Instituto Nacional de Cultura- y el Patronato de Arqueología convertido hoy en Comisión Nacional de Arqueología, nunca imaginaron que ellas serían desvirtuadas por aquellos que no se identifican con el proceso cultural peruano o por quienes buscan satisfacer intereses individualistas, ajenos al bienestar social y cultural de una nación.

Leyes como la 24047, y los recientes dispositivos para la titulación en los asentamientos humanos, el desarrollo turístico o la entrega de tierras eriazas, son una amenaza contra la conservación de los sitios arqueológicos.



Edificaciones modernas alrededor de un muro de adobón del complejo arqueológico de Maranga (Foto Archivo MAA).

Instituciones como el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia carecen de arqueólogos y de la conducción de profesionales de calidad, de la talla de Tello, Rebeca Carrión, Muelle, Lumbreras, Bonavía, Ravines, etc., y no cumplen con las funciones de investigación, conservación, protección y defensa del patrimonio arqueológico nacional. Sin planes y programas las acciones institucionales son pálidos reflejos del quehacer profesional en el pasado.

Con normas mal definidas y sin los profesionales adecuados, las instituciones estatales han sido incapaces de contener la avalancha destructiva contra los monumentos arqueológicos de Lima. He aquí algunos ejemplos:

La Ciudad de Maranga, ya mermada por las ciudades universitarias de la Católica y San Marcos o el Parque de las Leyendas continúa perdiendo sus monumentos a favor de quienes compraron a ambiciosos negociantes de tierras. Aunque existía un mandato judicial, que amparaba el derecho de defensa de la herencia colectiva, otra disposición tramitada a la sombra de una política populista ha permitido que la ilícita destrucción se transformase en una acción legal a favor de una minoría.

El Centro Ceremonial de Garagay, uno de los más antiguos y destacados del valle del Rímac, ubicado a unos pocos kilómetros del aeropuerto internacional, no ha tenido mejor suerte. A pesar de las paredes de ladrillo que lo cercaban, de la existencia de un museo de sitio, un guardián y de las investigaciones realizadas y publicadas, este

sitio monumental fue atropellado por un grupo de invasores, que destruyeron el cerco y la zona intangible. Año tras año, conforme se expandía el asentamiento, paradójicamente, decrecía o se limitaba la intervención del estado en la conservación y defensa de los monumentos arqueológicos.

Similar agresión han sufrido las ciudades de Armatambo, Huaquerones, Huaca Granados, Mangamarca, Vista Alegre, y muchos otros sitios.

Actualmente, para atender el programa político de titulación de los pobladores de los asentamiento humanos, se ha creado COFOPRI. Sin embargo, continúan las condiciones legales e institucionales negativas para la conservación, protección y defensa del patrimonio arqueológico, que hemos mencionado.

Nuevas amenazas se ciernen sobre los bienes culturales de la nación.

Ruth Shady

* "Información secreta contra los visitantes de la ydolatria, hecha en la villa de Carrión de Belasco". Huaura, 1622. AAL. Sección Hechicerías e idolatrías. Leg. 1: exp.8. En: GARCÍA CABRERA, Juan Carlos **Ofensas a Dios. Pleitos e injurias. Causas de idolatrías y hechicerías en Cajatambo. Siglos XVII-XIX.** Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", 1994. p. 99.



Viviendas edificadas al pie de la Huaca 15 de Maranga, usando los adobes arqueológicos como material de construcción (Foto Archivo MAA).